

Comunidad
de MadridCONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

ORDEN

NÚMERO 2403/2024

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Expte.: AM 001/2025

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

DISPONGO

Acordar el inicio y tramitación del Acuerdo Marco denominado **“ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS CON CARGO A LA DIRECCION GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD”**, a propuesta de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, cuya adjudicación se efectuará por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, al amparo de lo previsto en los artículos 131 y 146.2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, justificando su necesidad en los siguientes motivos:

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la necesidad de celebración de este Acuerdo Marco se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones:

- **La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor**, encomienda la tutela, guarda y acogimiento de menores a la Entidad Pública que en el respectivo territorio tenga a su cargo la protección de menores, habiéndose atribuido, en el caso de la Comunidad de Madrid, dichas funciones a la Consejería de Integración Social (en la actualidad Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales) mediante Decreto 49/88, del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad.

Esta Ley establece los principios rectores de la acción de las Administraciones Públicas en materia de infancia, así como actuar conforme a dichos principios rectores, y exige a las Entidades Públicas competentes la adecuada regulación, autorización, inspección y supervisión de las instituciones que acojan menores de edad.

- **La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia**, desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, dotando de contenido al citado concepto.

- **La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia**, tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y la adolescencia, que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio nacional, introduciendo una mejora en los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del artículo 39 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y, en especial, de los menores de edad.

Por su parte, el artículo primero, apartado nueve, se refiere a los supuestos de “Atención

Inmediata” estableciendo que “las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

Hemos de tener en cuenta, por tanto, que, atendiendo a la legislación internacional y nacional, no existe la posibilidad de establecer listas de espera para este perfil concreto de población, debiéndose garantizar su atención inmediata.

➤ **la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia** ha abordado con mayor profundidad la obligación de los poderes públicos de desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, y de establecer los procedimientos y protocolos de actuación necesarios para asegurar la coordinación entre las administraciones públicas competentes, revisando en profundidad el funcionamiento de las instituciones del sistema de protección a las personas menores de edad y constituyendo así una protección efectiva ante las situaciones de riesgo y desamparo.

➤ **La Ley 4/23 de 22 de marzo, de Derechos Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid** destaca como principio rector de la actuación de los poderes públicos la consideración del interés superior del menor como principio fundamental, y establece en su artículo 81 y 87, que la guarda de los menores, se podrá asumir por la Administración a través del acogimiento residencial.

En el artículo 103, define el acogimiento residencial como el modo del ejercicio de una medida de protección en el que la guarda se ejerce por la dirección del centro de protección en el que el niño se encuentra acogido, y que deberá permitir cubrir adecuada y eficazmente la diversidad de las necesidades detectadas.

Por otra parte, en el artículo 106, se definen las tipologías de los centros de acogimiento residencial y define las unidades convivencia para adolescentes, como *hogares dirigidos a adolescentes de doce a dieciocho años que cuentan con un grado de madurez que les permite involucrarse en su proyecto de vida, con el fin de lograr la autonomía e independencia adecuadas en su preparación para la vida adulta.*

➤ **El Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y la Adolescencia, aprobado por Decreto 88/1998, de 21 de mayo**, exige a las Residencias el desarrollo de las funciones de educación, y cuidado y promoción de la salud de los residentes (artículo 5), debiendo programar y desarrollar la vida cotidiana del Centro, diseñar, realizar y evaluar periódicamente el Proyecto Individual de cada menor, dar a los cuidados y atenciones a las necesidades básicas de los niños un profundo sentido educativo y afectivo (artículo 6), y facilitar la reincorporación familiar del menor o, en los casos en que ésta resulte imposible, promover la alternativa familiar más adecuada.

A su vez, el Estatuto determina, en su artículo 3, la tipología de recursos residenciales en función de la población a la que atienden y las características de su proyecto. Entre ellos, se encuentran los pisos para adolescentes, en los que se encuadrarían los recursos residenciales objeto de este Acuerdo Marco.

Mediante Orden 1003/2021 de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de 16 de junio de 2021, se adjudicó el acuerdo Marco de Servicios de “Acogimiento Residencial de adolescentes atendidos, con cargo a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad”, cuya vigencia fue desde 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2023. Con posterioridad, 19 de julio de 2021, se adjudicaron y formalizaron los contratos derivados del precitado Acuerdo Marco, cuyos plazos de ejecución se establecieron entre el 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2023.

Por Orden 1168/2023 de la Consejería de Familia, Juventud y Política social, de fecha 19 de abril de 2023, se procedió a prorrogar la vigencia del Acuerdo Marco referenciado. La vigencia del mismo se extendió desde el 1 de agosto de 2023 al 31 de julio de 2025.

La tendencia, en cuanto a la situación de demanda de atención a menores adolescentes con medida de protección, lleva a concluir sobre la necesidad de **mantener el número de plazas en recursos de esta última tipología**, garantizando la homogeneización de las condiciones, a fin de asegurar la igualdad en la prestación a los usuarios y la optimización del sistema desde el punto de vista administrativo, por ello se considera que la figura del Acuerdo Marco como instrumento de racionalización técnica de la contratación es la adecuada para canalizar la contratación de las plazas precisas.

Se considera, asimismo, que el sistema de contratos basados en el Acuerdo Marco economiza la gestión administrativa, gracias a la unificación en un procedimiento de los trámites necesarios, pudiendo disponer de forma inmediata de una bolsa de licitadores y logrando una contratación más ágil y eficiente. Se trataría, por tanto, de establecer condiciones idénticas para una misma prestación, dando a todas las plazas disponibles el mismo tratamiento en cuanto a la contratación, seguimiento de los contratos, precios y condiciones.

Por otra parte, y con el objetivo de favorecer la concurrencia de empresas e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos propios, resulta conveniente la licitación pública de la totalidad de las plazas existentes en la Red de centros de protección en la modalidad de pisos tutelados para adolescentes.

Por todo lo anterior, se propone la tramitación de un Acuerdo Marco para el Acogimiento Residencial de 120 menores, en la modalidad de Pisos tutelados (Orden 613/1990, de 6 de noviembre de la Consejería de Integración Social), de edades comprendidas entre 13 y 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años), atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, los próximos cuatro años.

Madrid a fecha de firma	<p>Por la Administración</p> <p>LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES (P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023)</p> <p>EL VICECONSEJERO</p> <p>Firmado digitalmente por: GOMEZ-TAVIRA GOMEZ-TAVIRA PABLO Fecha: 2024.07.31 12:29</p>
-------------------------	---